



Impacto humanitario y riesgos de protección asociados a la presencia de minas antipersonal y otros artefactos explosivos en la subregión del Triángulo de Telembí, Olaya Herrera y Tumaco, Nariño



Financiado por
la Unión Europea
Ayuda Humanitaria

Este documento abarca las actividades de ayuda humanitaria con la asistencia financiera de la Unión Europea. Las opiniones expresadas en él no deben interpretarse en modo alguno como opinión oficial de la Unión Europea. La Comisión Europea no se hace responsable del uso que se pueda hacer de la información contenida en el documento.



Suecia
Sverige

Este informe temático resume los hallazgos del monitoreo de protección (MP) realizado por el Consejo Danés para Refugiados (DRC) en el departamento de Nariño, específicamente en la subregión del Triángulo de Telembí que corresponde a los municipios de Barbacoas, Roberto Payán, Magüí Payán, en los municipios de Olaya Herrera (de la subregión del Sanquianga) y Tumaco (subregión Pacífico).

Para la elaboración del presente informe, DRC empleó una metodología mixta que incluyó el análisis de datos cuantitativos primarios, conseguidos a través de la aplicación de una encuesta hogar de MP, el análisis de datos cualitativos primarios recabados por medio de entrevistas con actores clave (EAC), discusiones de grupo focal (DGF) y observación directa, y la revisión de fuentes secundarias¹. El periodo de análisis abarca el **1 septiembre de 2024 al 28 febrero de 2025** y se enfoca en analizar las dinámicas de contaminación, los riesgos de protección y las consecuencias humanitarias asociados a la presencia de artefactos explosivos, examinando su impacto en las comunidades, las medidas de afrontamiento adoptadas y las capacidades de respuesta tanto institucionales como comunitarias frente a esta problemática en los municipios de la subregión del Telembí, Olaya Herrera y Tumaco en Nariño.

Encuestas hogar		
 244 familias	 1.010 personas: 521 mujeres (52%), 489 hombres (48%).	
 Rango etario <ul style="list-style-type: none"> • 132 personas (13%) entre 0 y 5 años. • 294 personas (29%) entre 6 y 17 años. • 138 personas (14%) entre 12 y 17 años. • 501 personas (50%) entre 18 y 59 años. • 83 personas (8%) con 60 años o más. 	 Pertenencia étnica <ul style="list-style-type: none"> • 934 personas (96%) afrodescendientes. • 18 personas (2%) grupos indígenas. • 9 personas (1%), sin respuesta. • 8 personas (0,8%), sin pertenencia étnica. 	 Nacionalidad <ul style="list-style-type: none"> • 1003 personas (99%) con nacionalidad colombiana. • 2 personas (0,2%) con doble nacionalidad (colombiana/ecuatoriana). • 2 personas (0,2%) con nacionalidad ecuatoriana. • 3 personas (0,3%) con otra nacionalidad.
 Entrevistas con actores clave	 Grupos de Discusión focal	
3 entrevistas con actores clave: Representantes de organizaciones humanitarias y liderazgos comunitarios	2 grupos de discusión focal: 30 personas (Liderazgos del Pueblo Indígena Awá y funcionarios de instituciones públicas).	

1. Se consultaron fuentes secundarias de: Informes de tendencias e impacto humanitario de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA); Informes de MAPP-OEA, UNMAS; Informes de entidades y dependencias estatales, como la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y Acción Integral contra Minas Antipersonal; y, Artículos de medios de comunicación locales y nacionales.



Introducción

“La dinámica del conflicto armado ha cambiado, es ya una lucha entre los mismos grupos para el control de territorios en donde hay presencia de minerales o también en donde se pueda desarrollar la economía ilegal”.
(Entrevista Actor Clave, Nariño)

Según el reporte de Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA), desde el año 1990 hasta febrero de 2025 se han registrado **12.540 víctimas por minas antipersonal (MAP) y municiones sin explotar (MSE) en Colombia**². De ellas, el 81% (10.179) resultaron heridas y el 19% (2.361) fallecieron a causa del accidente, lo que equivale a aproximadamente una muerte por cada cinco casos. El año más crítico fue 2006, con 1.224 víctimas, la cifra más alta registrada en la historia del país. En la última década, la tendencia ha mostrado una disminución constante – salvo en 2012 – hasta alcanzar en 2016 niveles comparables a los de 1999. No obstante, **entre enero y febrero de 2025**, se han reportado **28 víctimas** en el sistema de información³.

El conflicto armado en Colombia ha aumentado el riesgo de contaminación por artefactos explosivos en todo el país. La persistencia en el uso de MAP, MSE y artefactos explosivos improvisados (AEI⁴) por parte de los **Grupos Armados No**

2. República de Colombia, Acción Integral contra Minas Antipersonal, Estadísticas de Asistencia Integral a las Víctimas de MAP y MUSE, 28 febrero 2025. [Disponible aquí](#).

3. Ibid.

4. El uso de AEI se explica por su fácil instalación, alta capacidad de daño y facilidad de conformar cercos defensivos.

Estatales (GANE) para controlar sus zonas de influencia, bloquear la llegada de otros GANE o enfrentar a la fuerza pública⁵, ha generado impactos significativos.

Entre **septiembre de 2024 y febrero de 2025**, el **25%** de los eventos⁶ relacionados con artefactos explosivos ocurrieron en **Nariño**, seguido por **Cauca** (15%) y **Arauca, Putumayo y Norte de Santander** (9% cada uno)⁷. Estas acciones dejaron

al menos **53 víctimas** de MAP/MSE, de las cuales el **30%** eran civiles⁸. En el mismo periodo, las operaciones militares de desminado permitieron la identificación de al menos **4.725 artefactos explosivos** a nivel nacional, de los cuales aproximadamente **824** fueron hallados en **Nariño**. En lo corrido de **2025**, el **58%** de los artefactos encontrados han sido en **Norte de Santander**, seguido de Putumayo (10%), Cauca (8%), Meta (7%) y Nariño (5%).

Contexto y dinámicas de contaminación por artefactos explosivos

“Hay minas que ya están perdidas. A mí me dijeron: ‘Por allá no vaya, puede haber una mina en ese colino’. Algunos actores sacaron las minas que recordaban, pero otras quedaron ahí porque no todos se acuerdan dónde las pusieron. Como el conflicto sigue activo, si un actor pone una mina en un lugar, el otro puede poner otra en otro lado. Si uno recuerda dónde está la suya, pero el otro no, al final todos estamos en riesgo.”
(Entrevista Actor Clave, Nariño)

Nariño es el **segundo departamento** con más víctimas por MAP/MSE en Colombia, con **1.156 personas afectadas** entre **enero de 1990 y febrero de 2025**, lo que representa el **9%** del total nacional, según el Grupo de Acción Contra Minas Antipersonal de la Consejería Comisionada de Paz⁹. La población civil ha sido la más afectada, representando el **67%** de las víctimas, mientras que el **33%** corresponde a la fuerza pública. El impacto ha sido especialmente fuerte en las **comunidades**

5. Informe Periódico 37 sobre las labores de monitoreo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), realizadas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024, disponible aquí.

6. *Eventos* es un término genérico utilizado para referirse a los accidentes e incidentes provocados por MAP/MSE/AEI. *Incidentes*: hacen referencia a cualquier hecho relacionado con la presencia o sospecha de MAP/MSE/AEI que no cause muertes ni heridas a personas. Las categorías de incidentes incluyen: almacenamiento de arsenal, desminado en el marco de operaciones militares, incautaciones, hallazgos de MSE, producción de minas (fábricas) y sospecha de área minada. *Accidentes*: hacen referencia a cualquier hecho causado por la explosión de MAP/MSE/AEI que provoque daño físico, psicológico o la muerte de una o más personas. Las categorías de accidentes incluyen: accidentes por MAP y accidentes por MSE.

7. República de Colombia, Acción Integral contra Minas Antipersonal, Datos Abiertos – Registro de información de afectación por MAP y MSE e intervención. [Disponible aquí.](#)

8. Oficina del consejero Comisionado de Paz, visor de reporte Nacional de víctimas por MAP/MSE. [Disponible aquí.](#)

9. *Ibid.*

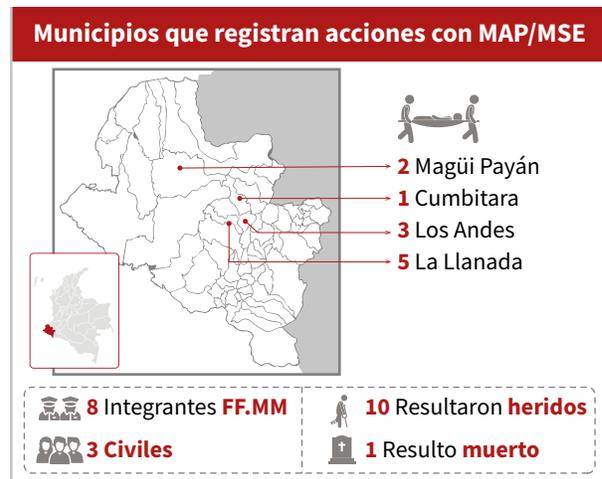
étnicas, siendo Nariño el departamento con más víctimas entre comunidades indígenas (183) y afrodescendientes (61)¹⁰. Un actor clave entrevistado señaló: “En mayor medida, la población indígena y las comunidades afro están afectadas, ya que viven en territorios de alta densidad de selva y ríos, ubicados en rutas estratégicas para el narcotráfico hacia y en el Pacífico nariñense”. Los municipios de Nariño con mayor número de víctimas por MAP/MSE desde el año 1990 son Tumaco (403), Samaniego (121), Ricaurte (96), Barbacoas (95) y Policarpa (69).

Entre **septiembre de 2024 y febrero de 2025**, se registraron **159 eventos** relacionados con artefactos explosivos en Nariño, entre los cuales se destacan **11 víctimas por MAP**¹¹ (de las cuales 1 persona falleció y 7 quedaron heridas), **cuatro más** que en el mismo período del año anterior; **1 evento por sospecha de área minada** y **147 incidentes por desminado en el marco de operaciones militares**¹².

Imagen 1: Eventos por artefactos explosivos en Nariño entre septiembre 2024 y febrero 2025



Imagen 2: Víctimas por MAP entre septiembre 2024 y febrero 2025 en Nariño



“[...] En algunos resguardos nos comentaban que se han presentado muchos casos en los que el accidente ocurre en Colombia, pero la atención se presta en Ecuador, en San Lorenzo, por ejemplo; entonces son casos que se atienden allá, pero pues obviamente suceden en el territorio nacional y por tanto no están dentro de esas de esas estadísticas que les acabo de indicar”.
(Entrevista Actor Clave, Nariño)

En los Andes (Cordillera de Nariño), los ataques con artefactos explosivos han afectado áreas rurales, así como los municipios de Barbacoas (en límites con Samaniego y Ricaurte) y a Consejos Comunitarios de Olaya Herrera y Tumaco. También se ha identificado contaminación por artefactos en las vías Barbacoas-Junín y Tumaco-Junín-Ricaurte, afectando especialmente a comunidades

10. Los datos aquí presentados hacen parte de los registros disponibles por AICMA, no obstante, existe una alta probabilidad de subregistro a causa de, entre otros factores, que la Oficina de la Consejería Comisionada de Paz - OCCP solo tiene registros de víctimas afrodescendientes desde 2002, por lo que es probable que el número real de víctimas sea significativamente mayor.

11. Se destaca que de las 11 víctimas por MAP, 9 han sido en lo corrido del 2025.

12. República de Colombia, Acción Integral contra Minas Antipersonal, Datos Abiertos – Registro de información de afectación por MAP y MSE e intervención. Disponible aquí.

afrodescendientes e indígenas Awá y Consejos Comunitarios de Tumaco¹³.

Según un informante clave, desde el **segundo semestre de 2023, Nariño ha experimentado un incremento sostenido de incidentes relacionados con MAP/AEI/MSE**, especialmente en las subregiones del Telembí, Cordillera Nariñense, Cuambayo, Sanquianga y Abades. Esta tendencia fue corroborada por la Defensoría del Pueblo, que entre julio de 2023 y marzo de 2024 emitió cuatro Alertas Tempranas advirtiendo sobre los riesgos asociados a la instalación de artefactos explosivos en un contexto de intensificación del conflicto armado entre los GANE y su confrontación con las Fuerzas Militares¹⁴. En DGF realizadas en Barbacoas, las comunidades confirmaron el aumento de los riesgos y eventos relacionados con artefactos explosivos en 2024 en comparación con 2023. Específicamente en Barbacoas, mientras que en 2023 se reportó una persona afectada por MAP/AEI, en 2024 se registraron cuatro víctimas: dos civiles y dos miembros de la Fuerza Pública. Además, las personas participantes alertaron sobre la presencia y/o sospecha de MAP y AEI en consejos comunitarios de Olaya Herrera y la zona rural de Barbacoas.

El aumento de estos eventos está directamente **vinculado a la reconfiguración y expansión territorial de los GANE**¹⁵, que buscan controlar rutas estratégicas¹⁶ para el tráfico de armas, minerales y narcotráfico, además de fortalecer su control sobre economías ilícitas como la minería ilegal y la producción de hoja de coca¹⁷. A pesar de las iniciativas de paz del Gobierno Nacional, la situación sigue deteriorándose, y el uso de artefactos explosivos se ha convertido en una **herramienta central dentro de la estrategia de control territorial de los GANE** en Nariño.

*“[...] Hay inestabilidad en los territorios por la cambiante dinámica de los GANE debido a la constante reconfiguración de los grupos y cambios de mando que ocurren en el marco de las disputas por los territorios”
(Entrevista Actor Clave, Nariño)*

Estos grupos emplean los artefactos explosivos con **cuatro objetivos principales**: (i) *contención territorial*¹⁸, impidiendo el avance de otros GANE con intereses expansivos¹⁹; (ii) *consolidación de control*, asegurando su presencia en zonas estratégicas; (iii) *limitación de operaciones militares*,

13. Infobae, Ejército ubicó depósito de explosivos de las disidencias: había más de cien minas antipersonal, 24 septiembre 2024. Disponible aquí.

14. Esta situación se documenta en 4 alertas tempranas (A.T) del Sistema de Aletas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, que puede consultar en: AT de inminencia 027-23 (consulte aquí), AT de inminencia 033-23 (consulte aquí), 002-24 (consulte aquí) y AT inminencia 008 – 24 (consulte aquí).

15. La reconfiguración de los GANE en el departamento se ha documentado en tres alertas tempranas -AT de la Defensoría del Pueblo: AT de inminencia 027-23 (consulte aquí), AT de inminencia 033-23 (consulte aquí), 002-24 (consulte aquí). Estas alertas tempranas también indicaron los riesgos identificados de contaminación por MAP - MUSE – AEI en los territorios.

16. Estas áreas se reconocen como corredores estratégicos de movilidad e intercomunicación entre las diferentes subregiones (dentro y fuera del departamento) para favorecer el tráfico de minerales, armas y narcotráfico.

17. Que incluye las rutas, zonas cultivadas, canales de comercialización y microtráfico.

18. Como parte de la estrategia de contención frente a la expansión de otros GANE y su protección, los grupos instalan artefactos explosivos en puntos estratégicos como: alrededor de sus zonas campamentarias, en áreas donde les permite visualizar el avance de otro GANE, en fuentes hídricas o torres de energía.

19. La Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 027-23 (consulte aquí) ha referido que en el escenario de confrontación armada entre GANES: “[...] Ante la expansión de un GANE hacia los municipios objeto de esta Alerta, es probable que, por parte del otro GANE, se contamine el territorio con minas antipersonales como estrategia de ‘protección’ para evitar el avance de la facción con intereses expansivos, conductas que generarían riesgos potenciales a la población civil que habita estos territorios”. Esta estrategia se ha sostenido en el tiempo en el departamento.

obstaculizando el accionar de las fuerzas del Estado; (iv) *control social*, que implica restringir la movilidad de las comunidades para evitar el acceso de otros GANE y fortalecer su dominio²⁰.

“[...] La contaminación de minas antipersonal es provocada por los GANE que se disputan el territorio. Instalan minas para apropiarse o marcar territorio, por su misma dinámica de poder”.
(Entrevista Actor Clave, Nariño)

La disputa territorial entre los GANE está estrechamente ligada a las economías ilícitas, que fortalecen su posición y garantizan su control sobre el territorio²¹. En las subregiones de Telembí, Tumaco y Sanquianga, el narcotráfico, así como la extracción y comercialización ilícita de minerales han convertido ciertas zonas en enclaves económicos estratégicos²² para estos grupos²³. Como resultado, se ha registrado un aumento en el uso de artefactos explosivos como herramienta de control territorial y social por parte de los GANE²⁴.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Nariño cuenta con más de 30.000 hectáreas de cultivos ilícitos, concentrados en municipios como El Charco, Tumaco

(Resguardo La Turbia y consejos comunitario Alto Mira y Frontera), Olaya Herrera, Policarpa y Roberto Payán (Consejo Comunitario Unión Cuenca de Isagualpi). Estas zonas coinciden con la presencia de estructuras armadas y reflejan cómo los GANE financian, compran y optimizan la producción y transformación de la hoja de coca²⁵. La reconfiguración de estos actores armados, caracterizada por nuevas alianzas y fragmentaciones²⁶, ha



20. La Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 027-23 ha referido que los GANE tienen un control social “para evitar que interactúen con la facción disidente, incluso prohibiéndoles la venta de pasta base a dicho grupo”. Además, ha referenciado que los GANE han generado control territorial y social a través de la instalación de artefactos explosivos y la demarcación “invisible” de caminos, cerros e incluso veredas.

21. Para consideraciones adicionales sobre economías ilícitas en estos territorios puede consultar: Vorágine, “En Nariño, las disidencias construyeron vías para sacar oro y coca”, 3 de noviembre de 2024. Disponible aquí.

22. Los *enclaves* son áreas donde se concentra la producción de cultivos ilícitos, en particular la hoja de coca, y están estrechamente vinculados al conflicto armado y a la presencia de GANE. Estos territorios, además de ser estratégicos por economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal (su distribución y venta) o el contrabando, son utilizados por GANE para financiar sus actividades, lo que perpetúa la violencia y la inestabilidad en las regiones afectadas. Se caracterizan por la limitación de acceso y libre circulación, presión y coerción sobre la población civil, ausencia de la institucionalidad. Son zonas que han sido configuradas de manera estratégica por su ubicación geográfica donde uno o varios actores armados ejercen un control significativo o exclusivo.

23. Cambio, “Enclaves cocaleros: la chispa de los enfrentamientos entre grupos ilegales en el país”, 26 febrero 2025. Disponible aquí.

24. El Tiempo, “Con minas antipersonal, grupos armados protegían laboratorio de cocaína en Tumaco: Moderno complejo tenía la capacidad de producir entre 3 y 4 toneladas del alcaloide”, 28 abril 2024. Disponible aquí.

25. La Vorágine, “En Nariño, las disidencias construyeron vías para sacar oro y coca”, 3 de noviembre 2024. Disponible aquí.

26. El País, “De guerrilleros a paramilitares: líderes sociales de Nariño denuncian que las disidencias del ELN cambian de bando mientras negocian la paz: La aparición de las Autodefensas Unidas de Nariño ha suscitado desconfianza de la población, que los señala de ser los mismos líderes históricos guerrilleros de la región”, 4 de diciembre 2024. Disponible aquí.

incrementado el riesgo para las comunidades. La Alerta Temprana 008 de 2024 reportó una alianza entre tres GANE para enfrentar a un cuarto y consolidar su control en el Triángulo de Telembí y la Cordillera Nariñense, donde operan más de 200 máquinas de minería ilegal²⁷. Esta dinámica ha generado graves afectaciones para la población civil, limitando el acceso a medios de vida y servicios básicos y exponiendo a las comunidades a mayores niveles de violencia y riesgo por la presencia de artefactos explosivos.

“La presencia de actores armados y la expansión de los cultivos de uso ilícito, que alimentan el conflicto [...], es otro factor clave que tiene que ver mucho con el aumento de víctimas por minas”.
(Entrevista Actor Clave, Nariño)

A pesar de los esfuerzos en desminado humanitario, la presencia de los GANE dificulta el acceso de los operadores a las zonas afectadas, aumentando el riesgo para las comunidades y obstaculizando la recuperación de los territorios contaminados.

Riesgos de protección

“Se perciben riesgos para la movilidad interna dentro de la vereda debido a la presencia de AEI/ MAP en caminos y terrenos abiertos, ubicadas por los GANES como estrategia de apropiación del territorio y prevención de ingreso de otros grupos”.
(Entrevista Actor Clave, Nariño)

La contaminación por artefactos explosivos en el **Triángulo de Telembí, Tumaco y Sanquianga** ha generado **un clima de temor, desplazamientos forzados y severas restricciones a la movilidad**²⁸. Entre en septiembre y diciembre de 2024, Nariño registró desplazamientos masivos, especialmente en los municipios de Policarpa, Los Andes y **Olaya**

Herrera, debido a enfrentamientos entre los GANE, el uso de drones con artefactos explosivos²⁹ y amenazas directas a la población para que abandonara sus territorios ante el riesgo de nuevos enfrentamientos. En otros casos, las comunidades no han podido huir y se han visto forzadas a restringir drásticamente su movilidad ante la presencia de MAP/MSE/AEI. Estas restricciones han tenido un impacto severo en la población, limitando el acceso autónomo a alimentos y servicios esenciales como salud y educación, debilitando los medios de vida y aumentando la vulnerabilidad de las comunidades afectadas.

27. Defensoría del Pueblo, “Minería ilegal es el nuevo ‘combustible’ para la expansión de los grupos armados ilegales”, 12 abril 2024. Disponible aquí.

28. OCHA, Informe de tendencias e Impacto Humanitario en Colombia 2024, enero - diciembre de 2024. Disponible aquí.

29. El uso de drones para transportar y detonar AEI se ha convertido en una tendencia preocupante, particularmente en los departamentos de Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Guaviare y Tolima. Ibid.

Restricciones a la movilidad debido al uso de artefactos

“Antes podíamos desplazarnos libremente; el pueblo Awá siempre ha vivido de la caza y la pesca. Pero ahora, todo eso se ha perdido. La pesca, por ejemplo, ya no es posible porque de noche nadie se atreve a salir. Los grupos están por ahí, y uno nunca sabe si hay una mina o qué peligro puede encontrar.” (Discusión de Grupo Focal, Nariño)

Durante el periodo de monitoreo, **el 60% de los hogares** (114 hogares) reportó **riesgos de restricciones a la movilidad**, mientras que el **42%** sufrió **restricciones efectivas**. En el **93%** de los casos, los responsables fueron los GANE, y el 73% de las familias afectadas optaron por el desplazamiento forzado como medida de afrontamiento. Parte de estas restricciones a la movilidad están relacionadas con la presencia de artefactos explosivos, ubicados en caminos y senderos de comunidades rurales en el Triángulo de Telembí, Tumaco y Sanquianga. Esta situación ha generado severas limitaciones al acceso a servicios esenciales y ha afectado especialmente a comunidades afrodescendientes e indígenas, quienes expresan temor al desplazarse por su territorio y han restringido sus actividades cotidianas para preservar su seguridad.

“Se perciben riesgos para la movilidad interna dentro de la vereda debido a la presencia de AEI/

MAP en caminos y terrenos abiertos, ubicadas por los GANES como estrategia de apropiación del territorio y prevención de ingreso de otros grupos”.
(Entrevista Actor Clave, Nariño)

Afectaciones específicas fueron identificadas en los Consejos Comunitarios Nueva Alianza (Telembí Arriba), La Gran Minga (Barbacoas), Unión Patía El Viejo (que comparte jurisdicción Roberto Payán y Magüi Payán) y Río Satinga (vereda Alto Merisalde, Olaya Herrera), los Resguardos Gran Sábalo y Pipalta Palvi Yaguapi (jurisdicción de Barbacoas), y en las veredas de El Cedro, Pueblo Nuevo, Barro Caliente y El Playón³⁰ (Tumaco).

“Ya no es seguro acudir a los centros de salud o escuelas. Esto genera un impacto directo en la salud y educación de la comunidad”. (Entrevista Actor Clave, Nariño).

Un actor clave destacó que la contaminación por artefactos ha bloqueado caminos que conducen a centros de salud y escuelas³¹, dificultando el acceso a bienes y servicios esenciales, especialmente salud y educación³². Específicamente, en Pipalta Palvi Yaguapi, los liderazgos comunitarios señalaron un alto riesgo para movilizarse hacia Buenavista o el casco urbano de Barbacoas tras un accidente ocurrido en junio de 2024, en el que una persona resultó herida por un artefacto ex-

30. Caracol Noticias, “Disidencias instalan artefactos explosivos cerca a casas de campesinos e indígenas Las autoridades del departamento de Nariño lograron destruir varios artefactos explosivos instalados por la Segunda Marquetalia, de las disidencias de las FARC”, julio 2024. Disponible aquí.

31. RCN Noticias, “Autoridades encontraron campo minado a pocos metros de una escuela en Tumaco”, 19 junio 2023. Disponible aquí.

32. Además de impedir el acceso, la presencia de artefactos explosivos ha afectado directamente la infraestructura de estos servicios, poniendo en riesgo a la población civil. Infraestructuras protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), como escuelas y centros de salud, han sido impactadas, generando temor y limitando su funcionamiento. En junio de 2024, la explosión de un artefacto en la escuela de un consejo comunitario en Barbacoas evidenció esta amenaza, afectando la asistencia escolar y agravando la crisis educativa en la zona.

plosivo. Esta situación ha resultado en fuertes limitaciones para acceder de manera efectiva a tratamientos médicos o gestionar documentación, situación que afecta diferencialmente a adultos mayores, mujeres gestantes, lactantes y personas con condiciones médicas graves.

El uso indiscriminado de artefactos explosivos también ha **limitado gravemente las actividades agrícolas, de pesca y minería artesanal**, afectando la subsistencia de las comunidades. La contaminación por artefactos ha **reducido el acceso a tierras cultivables**, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y económica de las comunidades rurales. Un líder comunitario describió el impacto directo: “No podemos acercarnos a nuestras fincas por temor a las minas. Esto limita nuestros medios de vida y afecta la seguridad alimentaria de toda la comunidad.” En un Consejo Comunitario del Río Satinga, se identificó que los GANE instalaron minas antipersonal alrededor de la vereda, impidiendo la movilidad de la población y dificultando actividades esenciales como la limpieza de la vegetación y la agricultura.

“[...] Tuvimos que quedarnos casi inmóviles dentro de la casa porque nos prohibieron caminar por la vereda. En una reunión reciente nos informaron que también hay partes minadas, pero no sabemos exactamente dónde, así que nos advirtieron que no vayamos a ciertas zonas, nos dijeron que los caminos que la gente usa para ir a trabajar o para hacer llamadas están bloqueados por eso de las minas”. (Entrevista Actor Clave, Nariño).

La incertidumbre sobre la ubicación de minas genera una constante sensación de zozobra, afectando



tando tanto la vida cotidiana como el bienestar emocional de la población. **El temor a pisar un artefacto explosivo provoca altos niveles de ansiedad y estrés**, ya que desplazarse por los senderos o acceder a las propias tierras se ha convertido en una amenaza latente. La imposibilidad de acceder a sitios sagrados y lugares de prácticas culturales tradicionales no solo afecta la relación de las comunidades con su territorio, sino que también debilita su identidad colectiva, interrumpe la transmisión de conocimientos ancestrales y genera un profundo impacto psicosocial. La cohesión social también se ve debilitada, ya que la restricción de la movilidad ha limitado la participación en reuniones, asambleas y actividades comunitarias, afectando el tejido social. Como resultado, los procesos de fortalecimiento organizativo y la autonomía territorial se ven gravemente afectados, mientras la población vive en un estado permanente de alerta e inseguridad.

“Nos sentimos profundamente afectados a nivel psicosocial. Cuando hay enfrentamientos, quedamos atrapados en el fuego cruzado y no nos queda otra opción que huir. Ahora, la incertidumbre nos impide incluso acceder a nuestros cultivos de pan coger. Pensamos: ‘No, yo no voy para allá, porque por ahí estuvieron, por ahí puede haber una mina’. (Discusión de Grupo Focal, Nariño)

Además, en comunidades indígenas, la instalación de MAP ha **impedido el desarrollo de proyectos agroforestales** y de recuperación de cultivos de cacao. La amenaza constante de explosivos ha limitado la capacidad de las Guardias Indígenas para proteger sus reservas y territorios³³. *“No se ha podido avanzar en proyectos medioambientales o de estudios de impacto porque hay sospecha de minas antipersonales. Esto ha restringido la*

movilidad y el desarrollo de iniciativas de protección territorial”. (Entrevista Actor Clave, Nariño)

Ante estas situaciones, los liderazgos comunitarios han desarrollado diversas estrategias de afrontamiento, incluyendo mayores restricciones en su propia movilidad en determinadas zonas y/u horarios, el silenciamiento de incidentes relacionados con MAP/AEI/MSE por temor a represalias de los GANE y la **interlocución con estos grupos para mitigar los riesgos sobre la población**. Un actor clave mencionó que algunas comunidades han negociado con los GANE para minimizar los accidentes: *“Se llegó a un acuerdo con el grupo para que limpien y señalicen ciertos espacios para evitar accidentes, pero no van a desinstalar las minas.”*

Desplazamiento forzado y retornos no seguros

La contaminación por artefactos explosivos ha provocado desplazamientos forzados y dificultado los procesos de retorno seguro. Durante el periodo del monitoreo, se identificó que comunidades desplazadas y retornadas sin garantías, especialmente en los Consejos Comunitarios de Olaya Herrera, enfrentan un alto riesgo debido a la persistencia de MAP/AEI/MSE en sus territorios.

“[...] No han podido retornar sí, a sus fincas, a sus parcelas, porque estos artefactos siguen

bloqueando sus territorios, bloquea procesos de restitución de tierras y proyectos de desarrollo”
(Entrevista Actor Clave, Nariño)

Un ejemplo de este riesgo ocurrió en Olaya Herrera, donde **una familia regresó a su territorio tras quince días de desplazamiento forzado debido a la falta de provisiones**. Al intentar recolectar frutos en una parcela de plátano, un miembro de la familia cayó en un campo minado, sufriendo graves lesiones junto con otro integrante de su familia. Este hecho evidencia la difícil

33. Los “territorios **protegidos**” por la Guardia Indígena se caracterizan por ser áreas de difícil acceso en resguardos indígenas bajo el control de los GANE. Estas zonas son clave para las comunidades por sus recursos naturales, como fuentes hídricas, vegetación y fauna, fundamentales en la cosmovisión Awa. La Guardia Indígena custodia estos ecosistemas, afectados por la minería ilegal y los cultivos ilícitos, que han provocado tala de árboles, pérdida de vegetación nativa y contaminación de las fuentes de agua. Además, la Guardia protege el territorio frente a las acciones de guerra de actores armados, enfrentando constantes amenazas y riesgos para la comunidad.



realidad de muchas familias que, ante la imposibilidad de acceder a medios de vida en el desplazamiento, se ven forzadas a regresar a territorios aún peligrosos, arriesgando su vida y seguridad. En las comunidades Awá desplazadas entre Barbacoas y Ricaurte, la persistencia del riesgo y el temor generalizado por la presencia de MAP y otros artefactos explosivos han provocado ciclos

de desplazamientos y retornos inseguros entre 2023 y 2024. La constante exposición al peligro ha generado un fuerte impacto psicosocial, como lo expresó un participante de una DGF: “Una de las cosas que más les afecta es tener que asistir a sus compañeros heridos, mutilados o asesinados por minas antipersonales”.

Una ilustración de la falta de condiciones para el retorno es el caso de una **comunidad indígena Awá**³⁴, que inicialmente fue confinada por la instalación de artefactos explosivos por parte de los GANE. Ante el alto riesgo para su seguridad, la comunidad se vio obligada a desplazarse y, debido a la sospecha y persistencia de MAP en su territorio, ha decidido no retornar. Esta situación ha generado un grave impacto en la seguridad alimentaria, ya que las familias han perdido el acceso a sus medios de vida tradicionales. La falta de garantías ha llevado a algunas familias a abandonar definitivamente el territorio **o a tomar la difícil decisión de separar forzadamente a sus hijos e hijas para protegerlos**. Esto puede incluir enviar a los niños y niñas a vivir con familiares en otras zonas o trasladarlos a entornos urbanos en busca de mejores condiciones, mientras los adultos intentan mantenerse en el territorio o buscan alternativas de sustento. Esta separación forzada genera un fuerte impacto psicosocial en los hogares, afectando la estabilidad emocional y el bienestar de las familias.

34. Asistencia legal colectiva que se desarrolla por parte de DRC en la cual se acompaña al Resguardo indígena Awá Guelmambi El Bombo para el reconocimiento de dos afectaciones por confinamiento en 2023 y 2024. Cabe anotar que esta comunidad posterior al primer confinamiento debió desplazarse forzadamente hacia el Diviso (Barbacoas), donde aún permanecen y la institucionalidad local no reconoce las dos afectaciones por confinamiento, ni se ha garantizado la respuesta y asistencia adecuada. Actualmente el proceso se encuentra en revisión de desacato a orden de Juzgado por parte de Personería Municipal de Barbacoas al reiterar negativa a la toma de la declaración de ambos hechos victimizantes.

La experiencia de esta comunidad refleja una realidad más amplia en la subregión del Triángulo de Telembí. Un actor clave señaló que en municipios como **Roberto Payán y Magüí Payán**, las comunidades desplazadas por la presencia de artefactos explosivos no han logrado retornar debido a la persistencia de estos en sus territorios. Durante el primer semestre de 2024, una comunidad de **Magüí Payán** fue escenario de varios enfrentamientos entre dos GANE, tras los cuales se dejaron MSE en la zona, obligando a toda la población a desplazarse al casco urbano de Olaya Herrera ante el alto riesgo para sus vidas. A pesar del tiempo transcurrido, la comunidad sigue sin poder regresar a su territorio debido a la presencia de estos artefactos, lo que agrava su situación de desplazamiento prolongado. En algunas comunidades como Unión Patía El Viejo (Magüí Payán), los GANE han restringido el retorno de la población, debido a disputas armadas y la presencia de AEI tras los enfrentamientos.

Este fenómeno no es un caso aislado. A través de DGF, se identificó que comunidades en Olaya Herrera, previamente afectadas por la contaminación de MAP, han sido desplazadas por esta misma razón, obligando a muchas familias a reubicarse en zonas urbanas o en ciudades como Cali y Buenaventura, donde enfrentan condiciones precarias y la incertidumbre de un futuro sin acceso a su territorio. La imposibilidad de retornar no solo interrumpe sus formas de sustento, sino que también debilita los lazos comunitarios y agrava la vulnerabilidad de los desplazados. Sin acceso a sus cultivos ni a prácticas económi-

cas tradicionales, como la pesca o la extracción de madera, las familias dependen cada vez más de redes de apoyo familiar, las cuales no siempre pueden garantizar una subsistencia estable.

Ante la imposibilidad de retornar de manera segura, las comunidades han desarrollado **estrategias de afrontamiento** que incluyen acciones de interlocución con los GANE. En algunos casos, como las comunidades de Olaya Herrera, se han establecido diálogos para garantizar mínimas condiciones de seguridad en el retorno. Sin embargo, en lugares como Magüí Payán, esta estrategia tiene limitaciones debido a la negativa de los GANE y la persistente alta presencia de artefactos explosivos. Además, las familias han recurrido a mecanismos como la separación familiar, donde niños, niñas o algunos miembros del hogar abandonan el territorio en busca de mayor seguridad.

Para garantizar su sustento, muchos hogares desplazados recurren a trabajos informales o actividades que les permitan obtener ingresos y alimentos en zonas urbanas o en otras comunidades. Sin embargo, esta estrategia conlleva altos riesgos, especialmente en entornos urbanos con una fuerte presencia y control de los GANE. En estos contextos, los hombres adultos suelen verse obligados a aceptar trabajos peligrosos e inestables, mientras que las mujeres y los niños, niñas y adolescentes enfrentan un mayor riesgo de explotación, mendicidad y violencia. Esto es particularmente evidente en lugares como Bocas de Satinga, el casco urbano de Olaya Herrera, donde la precariedad y la inseguridad agravan la vulnerabilidad de las familias desplazadas.

Impacto diferencial en comunidades y población a la exposición por el uso de artefactos explosivos



Mayor exposición de hombres a la contaminación por artefactos explosivos: Los hombres adultos en estas comunidades enfrentan un mayor riesgo de afectación por MAP/MSE/AEI debido a la presencia de estos artefactos en zonas de cultivos, caminos y otras áreas rurales vinculadas con actividades económicas. La mayoría de los accidentes registrados en la subregión del Triángulo de Telembí, Sanquianga y Tumaco involucran a hombres que realizaban labores agrícolas, de minería o de caza.

“La mayor cantidad de estadísticas muestran que es a los hombres. Porque generalmente los accidentes ocurren durante labores de campo, agrícolas o de minería. Cierto es el hombre, pues quien en gran medida sale más que la mujer a hacer labores. Este tipo de labores, por lo tanto, está más expuesto a esta situación.”
(Entrevista Actor Clave, Nariño)

Impacto diferenciado en las mujeres: Aunque los datos sobre víctimas de MAP/AEI reflejan una menor exposición directa de las mujeres a estos artefactos, ellas enfrentan impactos significativos en su rol de cuidado y apoyo a las personas sobrevivientes. La carga de atención y recuperación de las víctimas recae principalmente en las mujeres, lo que afecta las dinámicas comunitarias y las prácticas tradicionales de las comunidades. El impacto en las mujeres trasciende el ámbito individual, ya que genera una sobrecarga emocional y física que altera las dinámicas familiares y comunitarias, según un actor clave.

Mayor exposición e impacto en comunidades étnicas: Las comunidades afrodescendientes e indígenas de la región han sido particularmente afectadas por la contaminación con artefactos explosivos, lo que ha generado temor y ha restringido su libre circulación dentro de sus territorios. Esta restricción afecta directamente el acceso efectivo a medios de vida como la **agricultura, la pesca y la minería artesanal**, así como el ejercicio de **prácticas socioculturales** profundamente arraigadas en sus territorios ancestrales. El riesgo constante ha llevado a la suspensión de actividades tradicionales como la caza y la pesca nocturna, debilitando los sistemas de autoprotección y afectando la identidad cultural de las comunidades. En consecuencia, las comunidades enfrentan mayores dificultades para satisfacer sus necesidades básicas, lo que agrava las brechas existentes en términos de bienestar y seguridad.

“Los que van a cazar de noche ya no cazan. Los que van a mirar o a atrarrayar de noche ya no andan... ¿Quién va a andar con una linterna de noche por ahí, yo creo? ¿Sí me entienden?”

Entonces se van perdiendo ya esas, las costumbres se van perdiendo, las tradiciones, por eso. Miren, por ejemplo, hay partes que tienen minas.”
(Entrevista Actor Clave, Nariño)

Respuesta Institucional

“Hemos identificado otros casos en los que las personas no declaran el hecho victimizante. Por ejemplo, cuando van al hospital, los familiares restringen al personal de salud para hacerles preguntas y presentan el caso como una situación común, sin relacionarlo con el conflicto armado. Esto limita la capacidad del cuerpo médico y de las instituciones para activar la ruta de atención adecuada.” (Entrevista Actor Clave, Nariño).

La respuesta institucional ante las afectaciones por artefactos explosivos y los riesgos de protección asociados, como desplazamientos forzados, retornos no seguros y restricciones a la movilidad derivados de esta contaminación, presenta vacíos y limitaciones que dificultan una atención adecuada a las víctimas y sus familias. Persisten barreras estructurales y operativas que restringen el acceso oportuno y efectivo a los servicios de atención y respuesta, exacerbando las vulnerabilidades de las comunidades afectadas y marginando las víctimas y sus familias. En este contexto, las comunidades han desarrollado mecanismos de autoprotección. No obstante, la carga sobre sus recursos y capacidades ha puesto en riesgo la sostenibilidad de estas estrategias a largo plazo, evidenciando la necesidad de un fortalecimiento de la respuesta institucional.



“Hemos identificado demoras en la atención tanto para las víctimas como para sus familiares.

Las familias enfrentan grandes dificultades al salir de su territorio hacia una ciudad más grande y desconocida, donde no cuentan con una red de apoyo y dependen completamente de la institucionalidad. Es fundamental brindarles asistencia humanitaria y apoyo psicosocial, pero existen muchas barreras para acceder a estos servicios.”
(Entrevista Actor Clave, Nariño).

Uno de los principales problemas son las **deficiencias de las rutas de atención a las víctimas por MAP y otros artefactos explosivos en sus tres etapas**³⁵, según lo establecido en la Ley 1448 de 2011, que garantiza una asistencia integral para su cuidado, rehabilitación e inclusión social y económica. La activación de estas rutas se ve obstaculizada por el desconocimiento y la falta de difusión, así como por deficiencias en la respuesta y el seguimiento institucional. Esta situación se agrava por la **falta de infraestructura sanitaria adecuada** —como centros de salud-, la escasez de personal capacitado y la deficiente coordinación interinstitucional, lo que genera una respuesta limitada, fragmentada y sin protocolos efectivos para garantizar una atención rápida y articulada. Además, se han identificado dificultades en el acceso a atención médica especializada para las víctimas de MAP/MSE, con obstáculos en la disponibilidad de servicios de hospitalización, tratamientos médicos avanzados y rehabilitación. Como resultado, las víctimas enfrentan dificultades significativas para acceder

a los servicios de salud y protección. En varios casos, la respuesta inmediata ha recaído directamente en la comunidad debido a la limitada capacidad operativa de las instituciones locales.

“Primero partimos desde la debilidad institucional que tenemos en estos municipios para atender estos hechos. No hay suficiente talento humano en los puestos de salud para brindar atención [...] En el caso de un consejo comunitario de Barbacoas, la víctima fue trasladada por la comunidad hasta Tumaco debido a la falta de respuesta institucional.”
(Entrevista Actor Clave, Nariño)

El **subregistro de casos** sigue siendo un desafío clave. En zonas fronterizas con Ecuador, algunas víctimas buscan atención médica en el país vecino, lo que dificulta su documentación y registro en Colombia. La desconfianza hacia las instituciones y el temor a represalias y coacción ejercida por los GANE limitan aún más el reporte de accidentes e incidentes, incluidas las sospechas de áreas minadas. En muchas comunidades afectadas por la presencia de GANE, la población percibe a las autoridades como ausentes, lo que disuade la búsqueda de asistencia oficial. El temor a represalias y la coacción ejercida por los GANE agravan aún más esta situación. En contextos donde estos grupos tienen un alto grado de control territorial y social, las víctimas y sus familias enfrentan amenazas directas e indirectas para evitar que reporten accidentes e incidentes. Durante el periodo de monitoreo, **el 55%** de la población encuestada

35. Las etapas de atención de la Ruta a víctimas por MAP/MSE corresponden a: Etapa I: rescate y evacuación, atención en urgencias y atención médica, quirúrgica y hospitalaria; Etapa II: atención médica, afiliación EPS – si es necesario, rehabilitación (física, mental y sensorial) y atención psicosocial, a la personas sobreviviente y acompañante; Etapa III: inclusión socioeconómica.

señaló haber enfrentado barreras para acceder a la justicia tras experimentar vulneraciones de derechos. De este grupo, el 25% no denunció por miedo a represalias de los GANE, lo que evidencia las dificultades persistentes en el acceso a la justicia y la protección humanitaria.

“Obviamente van a haber muchísimos casos más que por diferentes situaciones, como por ejemplo el temor a represalias por parte de algún actor armado, la misma dificultad de salir de un territorio y las condiciones de acceso han provocado que en muchos casos no sean conocidos y, por tanto, pues no están registrados”.
(Entrevista Actor Clave, Nariño).

Un caso emblemático ocurrió en el segundo semestre de 2024 se identificó un evento por AEI que afectó un consejo comunitario ubicado en Barbacoas, donde un GANE ejerció presión para evitar que el caso fuera reportado, impidiendo su inclusión en los registros de AICMA. Este hecho refleja las limitaciones en la documentación de accidentes e incidentes con artefactos explosivos, lo que a su vez impacta las posibilidades de asistencia y reparación para las víctimas.

“En algunos casos hemos identificado demoras en la atención, tanto para la víctima como para sus familiares. [...] Hay muchas barreras para acceder en ese sentido. La institucionalidad local es donde más barreras se han identificado”
(Entrevista Actor Clave, Nariño)

La falta de respuesta oportuna a las restricciones a la movilidad y a los desplazamientos

forzados, así como a los retornos no seguros, aumenta el riesgo de exposición a MAP/AEI/MSE, incrementando la probabilidad de nuevos accidentes e incidentes y limitando el acceso de las personas a servicios esenciales y al ejercicio de sus derechos. Ante la falta de una respuesta institucional efectiva que brinde apoyo adecuado a las personas afectadas por desplazamientos forzados o restricciones a la movilidad, el riesgo de nuevos desplazamientos o retornos no seguros se incrementa. La insuficiencia de asistencia humanitaria, la ausencia de oportunidades económicas sostenibles en los lugares de acogida, y las precarias condiciones de acceso a vivienda, alimentación y servicios básicos empujan a las familias a desplazarse nuevamente en busca de seguridad o a regresar a sus territorios en condiciones de alto riesgo. **La respuesta institucional frente a los retornos resulta también insuficiente**, dejando a las comunidades expuestas a riesgos persistentes, sin mecanismos adecuados para mitigar las amenazas derivadas de la presencia de MAP/AEI/MSE. La ausencia de protocolos claros y la falta de información accesible sobre rutas de atención dificultan la toma de decisiones informadas por parte de las personas en proceso de retorno, incrementando la posibilidad de nuevos accidentes e incidentes y perpetuando la inseguridad en los territorios de origen.

La falta de capacidad en la respuesta y la deficiente coordinación entre instituciones responsables agravan la situación de las comunidades afectadas por artefactos explosivos y representan un incumplimiento de las obligaciones legales del

Estado, tanto a nivel nacional como internacional³⁶. En lugar de recibir una respuesta efectiva del Estado, estas comunidades se ven obligadas a asumir su propia protección sin contar con los recursos ni el respaldo necesario. En este contexto, en el Triángulo de Telembí, Tumaco y Satinga, las comunidades han tenido que desarrollar **mecanismos de autoprotección** para mitigar los riesgos de exposición a artefactos explosivos en un contexto de inseguridad que afecta sus estructuras socioculturales y su arraigo territorial. Estas estrategias incluyen la consolidación de redes de apoyo, la acción de la **Guardia Indígena**, procesos organizativos y el fortalecimiento de liderazgos locales, con el fin de proteger a las personas más vulnerables.

“La Guardia Indígena sigue siendo un actor clave en la protección comunitaria dentro de las comunidades indígenas, y son los primeros en prestar atención a las víctimas, trasladándolas fuera del territorio y poniéndolas a disposición de la institucionalidad”. (Entrevista Actor Clave, Nariño).

En comunidades afectadas por restricciones a la movilidad debido a la presencia de artefactos explosivos, se han implementado iniciativas comunitarias para la **construcción y mantenimiento de caminos rurales**, lo que ha mejorado el acceso

y movilidad en zonas de difícil acceso. En áreas con vegetación densa y sospechas de contaminación con MAP/AEI, los liderazgos sociales han demarcado rutas seguras por donde las comunidades pueden transitar, aunque con limitaciones en su circulación.

Las comunidades indígenas han incorporado la amenaza de artefactos explosivos en sus **Planes de Vida**³⁷, reconociéndola como una afectación directa a su territorio y población. En este contexto, la **Guardia Indígena** ha asumido un papel clave en la protección comunitaria. En el Plan de Vida del pueblo Awá, se establecen las formas y directrices para el relacionamiento con el territorio, la comunidad y las estrategias de protección, basadas en la autodeterminación y la cosmovisión propia. Esta incorporación refuerza la autoprotección desde una perspectiva cultural y territorial.

Las **comunidades afrodescendientes** han fortalecido su **participación en espacios institucionales de coordinación**, como las mesas y comités de AICMA a nivel municipal y departamental. A través de estos espacios, han propuesto medidas específicas y actividades concretas dentro de los planes de acción para mejorar la prevención y respuesta ante las afectaciones por artefactos explosivos.

36. En el ámbito nacional, se contradicen los compromisos establecidos en la Ley 387 de 1997, que define las responsabilidades del Estado en la prevención del desplazamiento forzado y la protección de las comunidades en riesgo, y en la Ley 1448 de 2011, que garantiza asistencia, rehabilitación e inclusión social y económica a las víctimas del conflicto armado, incluidas aquellas afectadas por minas antipersonal y otros artefactos explosivos. A nivel internacional, el país incumple disposiciones de la Convención sobre ciertas armas convencionales y su Protocolo II, que establecen la obligación de reducir el impacto de minas y artefactos explosivos en la población civil.

37. El Plan de Vida Awá, denominado Inkal Awá Sukin Wat Uzan, es una guía colectiva que reconoce, respeta y fortalece la identidad del pueblo indígena Awá. Esta estrategia integra todas las dimensiones de su existencia, incluyendo el derecho a la autodeterminación, el gobierno propio, el territorio y la identidad cultural. Se expresa en su cosmovisión, ley de origen, espiritualidad y prácticas en justicia, educación, salud, producción, cuidado familiar, transmisión del saber y comunicación. Además, destaca el vínculo cotidiano con su territorio ancestral y sagrado, el Katsa Su o Casa Grande para los Awá.

*“Participan de las mesas o los comités de AICMA, tanto municipal como departamental, y desde donde plantean medidas, sugieren actividades dentro del plan de acción a diferentes niveles”
(Entrevista Actor Clave, Nariño)*

El **acompañamiento de actores humanitarios** ha sido clave para reforzar las capacidades comunitarias y facilitar el acceso a asistencia. Las actividades enfocadas en Educación en el Riesgo de Minas (ERM) en las comunidades afectadas, junto con el seguimiento constante en la subregión del Sanquianga y Telembí realizado por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA), han fortalecido las capacidades locales y mejorado el acceso a servicios básicos. De igual manera, se han registrado avances en la respuesta institucional, como el proceso de desminado humanitario con el

Frente Comuneros del Sur en tres municipios de la Cordillera³⁸ y la adopción de un estándar nacional para operaciones en zonas de seguridad inestable. Esta acción **prioriza la atención al Pueblo Awá en Tumaco y Barbacoas**, representando un paso importante para reducir el riesgo de artefactos explosivos y mejorar la protección de las comunidades afectadas.

Las capacidades comunitarias reflejan la **resiliencia y organización local** en un contexto de conflicto y violencia. Sin embargo, las limitaciones en la respuesta institucional y la persistencia de las amenazas evidencian la necesidad de fortalecer las sinergias entre las comunidades, los actores humanitarios y las instituciones estatales para garantizar una respuesta integral y sostenida ante las afectaciones por artefactos explosivos.



38. Este proceso marca un avance significativo, ya que representa el inicio de operaciones de desminado en esa zona del departamento, lo que podría mejorar las condiciones de seguridad y reducir el riesgo para las comunidades locales.

Recomendaciones

Consejería Comisionada de Paz, Gobernación de Nariño y UARIV:

- Fortalecer la capacidad técnica de personeros municipales y de funcionarios de la administración municipal involucrados en la ruta de atención a víctimas de MAP y otros artefactos explosivos. Esto permitirá mejorar la capacidad de respuesta y reducir las barreras locales en la atención a las víctimas, incluyendo el diligenciamiento del Formulario Único de Localización de Eventos (FULE).
- Definir estrategias y acciones para garantizar la respuesta y asistencia integral que contemple las tres etapas de la ruta de atención a víctimas y sobrevivientes de MAP/MUSE y sus familias asegurando la activación de la ruta para este hecho victimizante bajo principios de seguridad y dignidad.
- Promover campañas y programas de educación en el riesgo de minas en comunidades étnicas en donde se haya identificado la presencia y/o sospecha de MAP/MUSE/AEI.
- Continuar con la asignación de zonas para el desminado humanitario en Nariño, priorizando las áreas más afectadas y de mayor riesgo.

Alcaldías Municipales, Personerías Municipales, UARIV, E.S.E locales:

- Incluir la acción contra minas y la contaminación por artefactos explosivos en los planes de gestión del riesgo y los planes de desarrollo municipal y departamental.
- Garantizar una respuesta integral y seguimiento efectivo dentro de la ruta de atención a víctimas de MAP y otros artefactos explosivos. Esto incluye evacuación, atención en salud, asistencia humanitaria, rehabilitación e inclusión socioeconómica, asegurando una respuesta centrada en las personas y mitigando vacíos en las diferentes etapas de atención
- Establecer canales de comunicación y seguimiento con las comunidades rurales para advertir sobre riesgos por la presencia o sospecha de MAP y otros artefactos explosivos, y activar mecanismos que permitan mitigar los riesgos y proteger a las personas.
- Implementar estrategias para mejorar el seguimiento de eventos relacionados con MAP y otros artefactos explosivos en las comunidades. Esto permitirá reducir el subregistro y mejorar la respuesta ante estas afectaciones, fortaleciendo la confianza y el reconocimiento de rutas y mecanismos comunitarios.

Actores que conforman comités AICMA a nivel local, departamental y nacional:

- Promover y definir estrategias con enfoque diferencial para brindar respuesta en desminado humanitario, asistencia integral a víctimas y educación en el riesgo de minas – ERM (ERAE), especialmente en comunidades étnicas.
- Fortalecer la coordinación entre todos los actores institucionales y comunitarios que participan en la ruta de atención integral para víctimas por MAP y otros artefactos explosivos para garantizar una respuesta articulada y eficiente.
- Garantizar la participación activa de actores comunitarios en los comités locales y departamentales de AICMA, asegurando que las comunidades afectadas tengan voz en las decisiones y acciones de respuesta.
- Incorporar el enfoque de triple nexo (humanitario, desarrollo y paz) en las operaciones de desminado, asegurando que, además de la remoción de minas, se implementen acciones sostenibles para prevenir la recontaminación y promover la estabilidad y el desarrollo en los territorios afectados. Esto incluye garantizar la recuperación económica, la consolidación de la seguridad y el fortalecimiento de las estructuras comunitarias para evitar la reaparición del riesgo.

